



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 62

NOVIEMBRE 2011

Nicaragua: del sueño a la pesadilla

Nicaragua en la región

Guatemala, Honduras y Nicaragua son tres sociedades arrastrando una larga historia de violencia, autoritarismo y exclusión social. Sin embargo, sólo Nicaragua rompió con el esquema derrocando a la dictadura más longeva de América Latina en 1979, intentando refundar la nación con un proyecto revolucionario durante diez años y enfrentando una guerra civil y una agresión externa conducida por Estados Unidos. Nicaragua constituyó no sólo la ruptura más radical de la región, sino que fue la única revolución latinoamericana de izquierda después de la experiencia cubana.

Veintidos años han pasado después de la derrota electoral del sandinismo que cerró el proceso revolucionario. En 1990 se inició una nueva fase política en la que se terminó con la guerra civil, se instauró una economía de mercado y un régimen de democracia liberal. Tres gobiernos de derecha han transcurrido desde entonces en un país sometido a la alta condicionalidad externa por parte de las instituciones financieras internacionales, la hegemonía de las políticas neoliberales y la progresiva recomposición de los grupos económicos tradicionales.

El FSLN volvió al gobierno en el 2007 y forzó su reelección en 2011 en un contexto hemisfé-



Centroamérica está enfrentada a un contexto difícil. Amenazada por el crimen organizado, está clasificada como la región más violenta del mundo, mientras la exclusión social y la pobreza campean. Los sueños tejidos en la década pasada para la pacificación, democratización y modernización están el piso. El plan regional más urgente e importante es para combatir la inseguridad y el crimen organizado.

Mientras, el último informe del Estado de la Región publicado recientemente, sostiene que desde la crisis de los 80 la región no había estado confrontada a tantas amenazas. Tres países concentran los mayores peligros: Honduras, con el golpe de estado de 2009, del cual no se recupera; Guatemala, un estado fallido que acaba de elegir como presidente a un ex militar acusado de graves violaciones a los derechos humanos; y Nicaragua, con un régimen político autoritario en marcha que recién sepultó las elecciones como uno de sus últimos recursos democráticos. La evolución de la región sin duda es alarmante, y la situación de Nicaragua es seguramente, la que tendrá mayores repercusiones políticas.

rico caracterizado por la pérdida de hegemonía de las políticas neoliberales, una ola de gobiernos de izquierda o progresistas, la búsqueda de nuevas políticas con más equidad y redistribución social. Pero este contexto, luego de la muerte de los modelos autoritarios de izquierda y derecha, también está marcado por la búsqueda de sociedades contractuales, más abiertas, democráticas y capaces de asentar derechos e instituciones de cara a los nuevos problemas del desarrollo. De allí que el retorno del FSLN al gobierno revistiera alguna trascendencia en la región y tuviera eco en ciertos sectores como tributo al recuerdo de la revolución que apoyaron.

Resultados electorales y un escenario frágil

Al menos en Latinoamérica es difícil encontrar en la actualidad un país donde las elecciones nacionales acumulen tal cantidad de señalamientos negativos previos y que éstos se confirmaran luego de realizadas, de manera que los observadores terminaran admitiendo que hubo elecciones, pero era difícil decir sobre bases confiables quien ganó y en qué proporción. Eso es lo que ocurrió recientemente en Nicaragua y el vencedor ha sido proclamado en condiciones de legalidad y legitimidad completamente descompuertas.

Desde las fraudulentas elecciones municipales de 2008, el sistema electoral nicaragüense ha sido fuertemente criticado, en el camino se agregaron nuevos señalamientos como la inscripción de la candidatura del presidente Or-

tega, la permanencia de facto de los magistrados del Consejo Supremo Electoral, las deficiencias en la cedulaación y en la depuración del padrón electoral. A ello se sumaron las trampas organizadas el mismo día de las elecciones y que fueron documentadas por organismos de observación nacionales e internacionales como la Misión de la Unión Europea y de



la OEA. El gobierno y el CSE han cerrado sus oídos a las denuncias.

La principal coalición de oposición, la Alianza PLI, se ha negado a reconocer los resultados electorales. Independientemente de las consecuencias futuras que están por verse, la primera y una de las más graves, es que las elecciones como base de legalidad y legitimidad del poder han quedado gravemente afectadas.

La brecha de desconfianza creada no hizo más que ensancharse desde el momento en que el presidente forzó la Constitución para reelegirse, pero a medida que se fueron fabricando las condiciones para que las elecciones dieran como resultado la permanencia del gobierno, perdieron su sentido y credibilidad como expresión política pluralista.

Ese hecho por sí mismo revela una fuerte fractura política y configura un escenario de fragilidad para el país. Poco importa ahora si el triunfo del oficialismo es real

o no, el hecho es que haberlo alcanzado por medios fraudulentos anula su legitimidad y más grave aún, esa legalidad sólo se puede mantener por la fuerza, utilizando dosis mayores de represión y discrecionalidad.

Volver al pasado

El triunfo electoral del FSLN cercano al 64 % y proclamado por el CSE se puede leer de varias maneras ante la imposibilidad de probar su veracidad de manera consistente. Desde el oficialismo, la intención es clara. Ante todo, es una señal que pretende establecer continuidad y recuperar el simbólico respaldo de las elecciones

efectuadas en 1984, en plena revolución, en lo más duro de la guerra y sin oposición real.

También pretende establecer una similitud con las votaciones que durante los 16 años anteriores derrotaron a Daniel Ortega con porcentajes superiores al 50% y con votos de castigo. Fuera de los círculos del partido, Daniel Ortega ha sido un personaje que no ha concitado masivas simpatías, en las elecciones del 2006 alcanzó su victoria con un 38% de votos, sin que los resultados finales fueran publicados y con una nebulosa sobre el 8% de resultados no publicados y que habrían significado, eventualmente, una segunda vuelta.

Ahora, todo ha apuntado a construir y simbolizar una suerte de reencuentro entre Daniel Ortega como líder, y los ciudadanos a través de la mítica idea de la revolución truncada con nuevos agregados mesiánicos.

Pero este forzado reencuentro se fabrica en un contexto en que el ejercicio se impone sobre otro sector opositor y disidente cada vez más crispado y sin salida, vedada la opción institucional y electoral. Sin duda se ha vuelto a generar una peligrosa mezcla que en la historia de Nicaragua ha terminado con enfrentamientos armados.

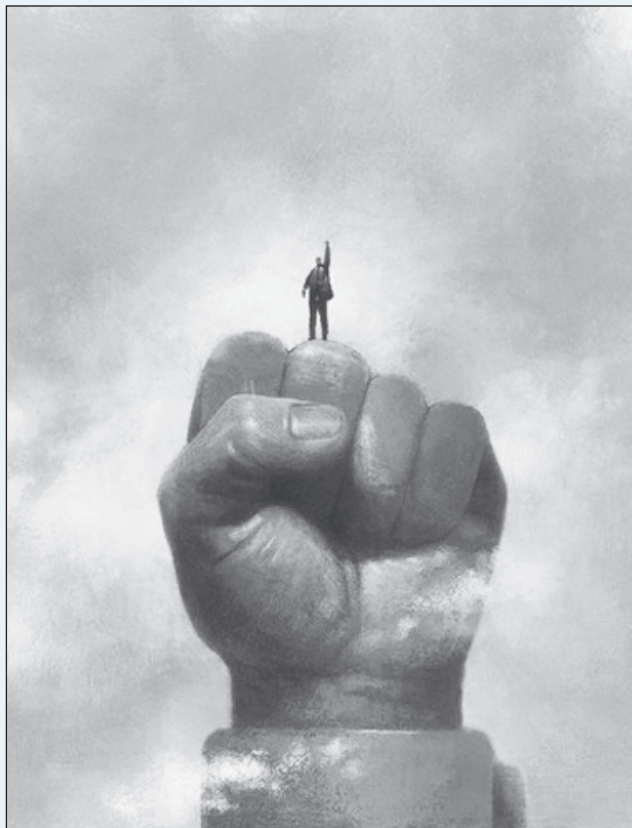
Un gobierno que asuma la conducción del país en esas condiciones tiene dos posibilidades: utiliza la fuerza para mantenerse, y ello lo convierte en un gobierno de facto, o bien, funcionaría en condiciones de extrema debilidad y se enfrentaría a crisis recurrentes.

Las condiciones del futuro escenario

En materia política la realidad del país es cruda. La sociedad nicaragüense no tiene una historia de derechos e instituciones. Durante los últimos veinte años la senda apenas había comenzado a recorrerse pero no sin enfrentarse a grandes dificultades. El país cuenta con una infraestructura institucional de tipo democrático en la formalidad, pero el ejercicio del poder carece completamente de respeto a los derechos y a esas instituciones. En realidad, los actores con poder solamente lo han utilizado a conveniencia para maquillar su comportamiento discrecional.

El partido de gobierno ha sido protagonista principal en las crisis del pasado y en las transacciones con el poder económico tradicional y las cúpulas de la derecha. Ahora, con una base económica propia, el gobierno de Ortega ha llegado a un entendi-

miento de coexistencia con estos sectores y con el estamento militar y policial, sobre un reparto de beneficios e influencias mutuas. El mecanismo de reparto no tiene nada que ver ni con el mercado ni con la economía real, y el resto de la sociedad ha quedado fuera. Solamente hay tres alternativas para



entrar en el círculo: ser parte de la familia, ser parte de uno de los grupos de poder y el padrinazgo.

Pero además, sus visiones coinciden respecto a las instituciones y los derechos ciudadanos, de manera que no importa si se tiene derecho, si hay mérito, si se han juntado firmas, si se va a elecciones, si se marcha o no. Las dos últimas elecciones, la municipales del 2008 y las nacionales del 2011, han confirmado esta pirámide de poder con Ortega a la cabeza como gran mediador de intereses.

El precio por salir de este esquema es sumamente alto. La opción que el poder le deja a la oposición se reduce a una sola: si quieres contestar mi gobierno, tendrás que pelear por ello. A sabiendas del daño sufrido por el país en la guerra civil recién pasada, esta opción es un verdadero chantaje moral y físico a toda la sociedad. Así, el presidente de la paz cuida de ella, evitando que se le opongan.

Nicaragua queda así entrampada y cualquier observador honesto sabe que en el país no existen condiciones para un proceso democrático ni para la existencia de la oposición, tenga ésta razón o no. De esta manera, la posibilidad de una época democrática para Nicaragua, ha sido abortada.

En perspectiva, esto pone el escenario de la reinstalación de Ortega en el gobierno y de la nueva Asamblea Nacional, en otras condiciones. Los engranajes están bien aceitados, pero esto no debería ser confundido con la normalidad política. La impronta antidemocrática del régimen político lo seguirá marcando.

Puntos de conflicto

El rumbo político del país y la deriva de las instituciones bajo la presión gubernamental abrió varios frentes en los que se irá redefiniendo el escenario político. En este marco, los puntos de conflicto se despliegan en una nueva coyuntura que tiene visos de ex-



tenderse más allá del 9 de enero próximo.

En primer lugar, queda abierta la disyuntiva en relación a la consolidación de la brecha entre legalidad y legitimidad. El gobierno seguramente intentará mantener a los funcionarios de las demás instituciones estatales que han servido muy bien a sus propósitos. En ese caso, el gobierno estaría sostenido por una institucionalidad de facto y la crisis se instalará irremediablemente.

Otro punto de conflicto es la realización de nuevas transacciones entre gobierno y un sector de la oposición. Tal como lo demuestra el pasado reciente, en Nicaragua los arreglos al filo de la navaja son recurrentes y un buen recurso para contener a la oposición. Esta impronta marcaría la pauta del continuismo en una lógica establecida desde hace más de una década y en donde lo esencial está hecho. El gobierno en todo caso, buscará bajar la presión.

En perspectiva, el régimen político le plantea a la sociedad el dilema de quedar moldeada en el poder discrecional como ocurrió con Somoza durante 43 años, o alternar con ciclos recurrentes de crisis. No se puede ignorar que el camino escogido por el orteguismo lleva al ahogamiento de la sociedad que está en desacuerdo.

Pero la dinámica del escenario político está en el campo de la oposición. Si algo positivo dejaron las elecciones es que el espacio político se ha venido redefiniendo y limpiando gradualmente, dando lugar al surgimiento de un nuevo eje de articulación y movilización política. Aún es temprano para precisar la consistencia y alcance de ese nuevo eje. La Alianza PLI que reunió a la mayoría de oposición democrática, incluida la disidencia del sandinismo, se estableció tardíamente como una

alternativa en la competencia electoral, pero es claro que no estaba suficientemente preparada para el día después aún cuando ya se anticipaba el fraude y que la oposición había discutido estos temas. La oposición sigue siendo reactiva, carece de una estrategia propia y de liderazgos con de capacidad de articular acciones



en el corto y mediano plazo.

Ahora los desafíos fundamentales de la Alianza y la oposición en general, es consolidarse como una fuerza alternativa con una propuesta clara de restablecimiento de la democracia y enfrentar el poder de coacción del gobierno que impone hechos consumados con apariencia de legalidad para que no se puedan revertir.

La gobernabilidad paralela está entronizada en el régimen político y por eso, esta situación no se puede enfrentar con una reversión de espacios legales, democráticos e institucionales. El resquebrajamiento del sistema electoral deja en suspenso las elecciones municipales de 2012 y las convierte en un ejercicio casi inútil. La forma en que se resuelva la coyuntura actual será determinante para ese eventual nuevo escrutinio.

Una incógnita apenas disimulada pesa sobre la actuación de la policía y el ejército en el caso de que el conflicto y la violencia política esca-

len. Hasta ahora ambas instituciones han mostrado estar subordinadas a la lógica institucional prevaleciente en el país, pero hace falta ver si en ese escenario poco deseable se convertirán en la guardia pretoriana del presidente o van a seguir el curso de los procesos de profesionalización que han promovido durante los últimos quince años.

Un contexto internacional favorable

El contexto internacional, latinoamericano y regional está en condiciones tales que los acontecimientos del país no pesan mucho y ello favorece el diseño de Ortega a pesar del poco reconocimiento y la poca credibilidad internacional de los resultados electorales. A nivel internacional hay suficiente temas en crisis como para preocuparse por un país

pequeño.

A nivel latinoamericano hay dos factores importantes: la existencia de otros gobiernos solidarios con Ortega que le permiten un cierto sostén y una situación regional tan descompuesta que nadie quiere focos de inestabilidad. Centroamérica no es ajena a esto, especialmente con la crisis de seguridad que vive y a las puertas de ejecutar una estrategia de seguridad regional. El antecedente de Honduras es ilustrativo. Más valen malas elecciones, que rupturas graves.

Sin embargo la evolución futura de este contexto y de los apoyos internacionales que pueda concitar el gobierno depende en gran parte de sus actuaciones futuras. En ese sentido, todavía está pendiente de verse las reacciones de organismos e instancias internacionales que tienen como cláusulas el respeto de la democracia. Ese es otro frente abierto para el futuro próximo.